

dimientos del Juzgado 3º de lo civil de esta Ciudad, que decretó la expedición de cédula hipotecaria contra la casa número 11 de la calle de Zuleta que fué de la Señora Doña Juana Escontría por el adeudo de capital y réditos que dicha casa reconoce á favor de D. Antonio Escandon, con cuyo decreto reputa el quejoso violadas las garantías á que se refieren los artículos 14 y 27 de la Constitución federal, y

Considerando, respecto de la garantía á que se refiere el artículo 27: que en el presente caso, no puede decirse propiamente vulnerada, porque se refiere á expropiación verdaderamente tal.

Considerando, respecto de la violación de la garantía á que se refiere el artículo 14: que la escritura por la que se pidió que se expidiera y en virtud de la que se mandó expedir la cédula hipotecaria, fué otorgada en 23 de Octubre de 1865 en cuya fecha aun no se habían promulgado los Códigos Civil y de Procedimientos del Distrito Federal; que si bien el Código de Procedimientos civiles ha introducido una innovación en el procedimiento hipotecario, tal innovación está íntimamente enlazada con la reforma radical que introdujo el Código Civil en el sistema hipotecario, mejorando notablemente la condición del acreedor, de modo que en este punto no pueden aplicarse las disposiciones del Código de Procedimientos á un negocio, sin considerar aplicables á él las del Código Civil, dándose por lo mismo efecto retroactivo no solo al Código de Procedimientos, sino también al Civil; por lo expuesto, y de conformidad con lo que ordena el artículo 101 de la Constitución federal, se decreta: que se reforma la sentencia pronunciada acerca de este juicio el 11 de Agosto próximo pasado, por el Juez 2º de Distrito de esta Ciudad que niega el amparo y se declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á D. Antonio Sanchez del Rio contra la resolución del Juzgado 3º de lo Civil, en que dispuso la expedición de cédula hipotecaria respecto de la casa núme-

ro 11 de la Calle de Zuleta de esta Ciudad, por el reconocimiento otorgado á favor de D. Antonio Escandon en la escritura de 23 de Octubre de 1865, por violarse la garantía individual que otorga el artículo 14 de la Constitución federal.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*José María del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Octubre 2 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de S. Luis Potosí por el C. Desiderio Altamirano, contra los procedimientos del C. Juez 1º de letras de la Capital de dicho Estado, por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor fiscal dice: que D. Desiderio Altamirano, solicita amparo de la Justicia federal, contra el hecho de estársele juzgando y habérse decretado su prisión por el Sr. Juez primero de letras de la Capital, quien está conociendo criminalmente por responsabilidad en su mal manejo como empleado federal que fué el año de 1872,

al estar declarado en sitio el Estado. Funda su queja en la violacion de garantías que otorga á los ciudadanos el artículo 14 de la Constitución general de la República, y por estar comprendido el caso en la fracción 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, pide la suspension del acto que motiva la prision decretada en su contra.

El Sr. Juez primero de letras apoya el informe que ha producido, en que el citado Altamirano le fué consignado por el Gobierno del Estado, á virtud de que por un ocuso del subteniente retirado Zenon Chavarria, en que pedía le fuera satisfecha la pension de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año pasado, que habia dejado de percibir, se descubrió estar falsificados no solo los recibos de aquellos meses sino otros de varios de los pensionistas del Estado, cuyo delito se atribuye al citado Altamirano por haber sido el encargado en la administracion principal de Rentas del ramo de pensionistas, como contador que fué de aquella oficina. El esclarecimiento pues, de aquel hecho criminal, dió origen á la consignacion de que se ha hablado, y el prestar méritos la averiguacion que se practica, hizo que aquel funcionario decretase la segura prision del quejoso. La cuestion que se ofrece y propone aquella autoridad, es si procede ó nó el recurso de amparo que se ha interpuesto, y si tal recurso basta para inhibirla del conocimiento del asunto, dirimiendo la competencia por solo tal medio. Se trata en el presente caso del delito de falsificacion cometido por un empleado, y claro es que tiene que recurrirse á fijar la atencion en la calidad ó condicion del empleado que ha incurrido en aquella responsabilidad, y en la naturaleza ó objeto de la cosa falsificada. Por la constancia de fojas 2, que acompaña el quejoso, se ve, que fué nombrado por el Gobierno y Comandancia militar del Estado, Contador de la Administracion principal de Rentas de la Capital, en Enero de 1872; y por la justificacion ó copia certificada que

adjunta á su informe el Sr. Juez primero de letras, se demuestra tambien que como tal empleado, el citado Altamirano aparece responsable de la falsificacion descubierta en los recibos de los meses á que se refiere el subteniente retirado Chavarria, así como el de otros pensionistas. Esto patentiza, que tal delito fué cometido por un empleado que durante el estado de sitio en aquel año, estuvo encargado de manejar y distribuir los caudales que por entonces pertenecian al Gobierno general exclusivamente, no obstante ser producidos en el Estado, cuyas rentas destinadas para las atenciones del Gobierno general; las circunstancias excepcionales que mediaban por entonces, hacian que pertenecieran al fondo público nacional, formado para los gastos de la Guerra que sostenia contra los sustraídos de la obediencia del Gobierno; y si es que aquel dicho empleado, faltando á la confianza pública que se le dispensó, observó el mal manejo que se le atribuye, con perjuicio no solo de las rentas que administraba, sino de los particulares en quien las distribuia, suplantando ó corrompiendo de alguna manera los documentos que debian acreditar su mismo manejo; es evidente que la falta en que incurrió, fué cometida en el desempeño de sus funciones, las que ejercia en una época en que esa misma responsabilidad estaba afecta á intereses y autoridades del orden constitucional, sino extraordinario, que la situacion habia creado, y por lo mismo tanto por los intereses de que procedía esa misma responsabilidad, como por las circunstancias en que habia sido contraída, á ninguna otra autoridad correspondía y corresponde el conocimiento de ella, que á la federal supuesto que esta era la única que en sus funciones no habia sido restringida, y que los derechos que por el interes de la Hacienda pública general conservaba y ha tenido sin interrupcion, ella ha sido la única que legalmente, y retrotrayéndose á época en que estaba como ha estado expedita en sus funciones, ha podido y puede inter-

venir conociendo y decidiendo de los hechos criminosos que tengan pendiente la responsabilidad de los empleados, creados bajo su vigilancia é inspeccion. Tenemos por lo mismo, que tanto por la condicion y calidad del empleado de que se trata, como por la naturaleza y objeto de que procede el delito que se le atribuye, el conocimiento del asunto corresponde á ese Juzgado, como al propio natural, y el destinado para el caso segun la ley. El Sr. Juez primero de letras manifiesta y cree, que es el competente para conocer en el negocio, porque los Tribunales ordinarios, no obstante el estado de sitio de que se ha hablado, estuvieron en el ejercicio de sus facultades, lo mismo que lo estuvo el de Distrito del Estado; esto ciertamente no se puede negar; pero de que haya sido así, no se deduce ni que hayan subsistido en su plenitud de facultades para conocer de todos los delitos, y por eso vimos que de varios de ellos estuvieron inhibidos; ni que las personas que los cometian dependian absolutamente de su jurisdiccion, pues que suspensas varias de las garantías individuales, las mismas leyes expedidas ad hoc, determinaban de que hechos y personas responsables podrian juzgar; luego es claro que sin estar tambien privados los tribunales de la federacion, de decidir en los negocios de los empleados creados durante la administracion escepcional en que estuvo el Estado, la responsabilidad de estos databa en su origen de esa misma situacion, que por entonces y en virtud de lo extraordinario de las circunstancias, se habian reasumido en una sola autoridad facultades de distinta esfera, Orden y categoria. Tambien cree el Sr. Juez primero de letras, que el quejoso, antes que el recurso de amparo debió haber promovido el de competencia, por entender que el primero no es el medio propio para ventilar el segundo; ni que el Juzgado de Distrito es el que debe dirimir aquella, por el amparo que se solicita, sino el Tribunal establecido por la ley. Como estuvo y ha

estado en su derecho el peticionario para hacer uso de los recursos legales que le dá la ley, ha adoptado el de amparo, porque ciertamente el ser juzgado el individuo por una autoridad que no es la señalada por la ley, envuelve una violacion de garantías, y dá el derecho para que aquella sea excluida de conocer, lo que equivale á promover competencia en distinta via y bajo distinto recurso; y por lo mismo, siendo el que ha escogido Altamirano uno de los que legalmente pueden introducirse con mayor violencia y prontos resultados, bien pudo apelar á ese medio como lo ha hecho para conseguir el objeto que se propone de no ser juzgado por una autoridad que no es la propia, por tratarse de averiguar su manejo, como empleado que fué no del Estado sino de la Federacion, y para quien es la única con quien está obligado. En consecuencia, el Ministerio entiende, que por las razones emitidas, ese Juzgado está en el deber de suspender el acto que ha motivado la presente queja, dando entrada al juicio de amparo que se ha promovido, para resolver sobre la violacion de garantías que se amerita, estando como está comprendido el caso en la fraccion 1.^a del artículo 1.^o de la ley de 20 de Enero de 1869. Tal es mi parecer que someto al mas ilustrado de ud.

San Luis Potosí, Julio 18 de 1873.—
Gregorio Vásquez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Julio 21 de 1873.—
Visto el escrito de D. Desiderio Altamirano, en que pide amparo contra los procedimientos del ciudadano Juez primero de letras del Partido de esta capital, que le está formando causa criminal y ha decretado su formal prision, por responsabilidad que parece resultarle en el tiempo que fué contador de la administracion principal de rentas del Estado, pidiendo previamente la suspension de la prision, y fundando su queja

en que con aquellos procedimientos se viola en su persona la garantía que otorga el artículo 12 de la Constitución, porque habiendo sido empleado en el tiempo del sitio por nombramiento del ciudadano General Corolla, debe ser juzgado por el Tribunal federal.

Vistos, el informe de la autoridad judicial mencionada que rindió con arreglo al artículo 59, y el pedimento del ministerio público que opina por la suspensión de la prisión por las mismas razones que aduce el quejoso.

Considerando: 1º; Que la única razón en que se hace consistir el amparo, es la incompetencia del Juzgado del orden común para conocer de la causa que se está instruyendo á D. Desiderio Altamirano, lo cual corresponde declarar á la Corte Suprema de Justicia, conforme al artículo 99 de la Constitución.

2º: Que si en el caso hubieran de suspenderse los procedimientos del ciudadano Juez primero de letras, resultaría que el Juez federal que es parte en la competencia, podría en cierto modo prejuzgar la cuestión, entorpeciendo la administración de justicia, además que no suspendería la prisión de Altamirano, sino que seguiría el procedimiento en el estado en que se halla.

3º: Que las consideraciones anteriores demuestran, que no es aplicable al caso el artículo 14 de la Constitución, porque hasta hoy es dudoso si es competente el Tribunal federal para conocer de los negocios de los empleados del Estado en el tiempo del sitio.

4º: Que el delito por que se está juzgando á D. Desiderio Altamirano, es perteneciente á las cantidades que debieron percibir los pensionistas del Estado.

Por tales consideraciones y fundamentos legales, debía declarar y declaro: Primero; que no ha lugar á suspender la prisión de D. Desiderio Altamirano. Segundo; Que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á D. Desiderio Altamirano contra los

procedimientos del ciudadano Juez de letras del Partido de la capital que le está formando causa y ha decretado su formal prisión, y contra lo que se interpuso este recurso.

Hágase saber; publíquese en los periódicos y elévense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia de la Unión para su revisión. Así lo decreto y firmé el ciudadano Lic. Conrado Díaz Soto, Juez de Distrito del Estado. Damos fé.—*Conrado Díaz Soto.*—*Bernardo Galindo.*—*Feliciano P. Reyes.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 5 de 1878. Visto este juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por el C. Desiderio Altamirano contra los procedimientos del C. Juez 1º de letras de la Capital de dicho Estado, que le está formando causa criminal y ha decretado su formal prisión, por responsabilidad que parece resultarle en el tiempo que fué Contador de la Administración principal de rentas del Estado; fundando su queja, en que con aquellos procedimientos se viola en su persona la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitución, en virtud de que el conocimiento de dicha causa corresponde á los Tribunales federales. Vistas las constancias de los autos y la sentencia del Juzgado de Distrito que negó el amparo al quejoso, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de San Luis Potosí en 21 de Julio próximo pasado, que declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á D. Desiderio Altamirano, contra los procedimientos del C. Juez 1º de letras del partido de la Capital del Estado de San Luis Potosí.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José Garcia Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 18 de 1873. *Lic Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por el Lic. Próspero O. Vega, contra el cobro de contribuciones á varios vecinos de Querétaro.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic. Próspero O. Vega en uso de los poderes que ha exhibido, conferidos por setenta y un vecinos del Estado, ha interpuesto el recurso de amparo contra el acto de exigírseles contribuciones por la Recaudación principal respectiva y la Tesorería Municipal. Funda su pretension, en que carecen de poder público los que las han impuesto y los que las recaudan.

Los decretos de 24 de Febrero y de 29 de Marzo del año corriente, en virtud de los cuales se cobran esos impuestos, han sido expedidos, el uno por el Ejecutivo del Estado con autorizacion de la Legislatura, el otro por esta misma; pero como ni la

una ni la otra son autoridades legítimas, sino realmente usurpadoras del poder público, les falta el carácter de ley á las disposiciones referidas, y el de *autoridad competente* á los que pretenden cumplirlas, al decir de los quejosos. Comparando estos lo expuesto, con los artículos 16 y 101 de la Constitucion, resulta en su concepto, que las leyes de contribuciones á que aluden, se han expedido por *autoridades incompetentes*, y violando por lo mismo el referido artículo 16, habiendo lugar en consecuencia, al amparo respectivo.

La Legislatura actual se instaló sin *quorum*, y el artículo 41 de la Constitucion del Estado dice: que "el Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo, sin la concurrencia de mas de la mitad del número total de sus miembros." En consecuencia, todos sus actos son nulos.

El coronel Don Julio M. Cervantes no puede ser Gobernador del Estado, porque se lo prohiben los artículos 77 y 80 de la Constitucion local, aparte de proceder su eleccion de la nula Legislatura.

"Una vez impuesta á los Estados la forma de gobierno representativo popular, y consistiendo esta esencialmente en que las autoridades de cada Estado sean nombradas como se previene en su respectiva Constitucion, que nunca puede ser contraria á la federal;" es consecuente que los funcionarios de Querétaro debieron ser electos en la forma constitucional.

Una infraccion de la Constitucion particular de un Estado en esta materia, importa por lo mismo la infraccion de la Constitucion Federal.

Sea de esto lo que fuere, desde luego se palpan los inconvenientes que resultan de sustrair á un individuo de la accion de un Gobierno de *facto*, dejando á este subsistente. Semejante proceder convierte al amparado en privilegiado respecto de los demás que continúan sujetos á la obediencia de la administracion de hecho, dejando de ser la igualdad la gran ley en la República,